

CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la insercion de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condicion 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera de la capital 10
Un semestre id. id. 6
Un trimestre id. id. 4
Números sueltos 0.25

Se publica todos los dias excepto los Domingos, Viernes Santo, Ascensión, Natividad, Corpus Christi y San Roque.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular, á los veinte dias de su promulgacion, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgacion el dia en que termine la insercion de la ley en la *Gaceta* (Artículo 1.º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS

SS. MM. el Rey, y la Reina Regente (q. D. g.) y Augusta Real Familia, continúan en San Sebastián sin novedad en su importante salud.

GOBIERNO DE PROVINCIA

Circulares

Habiéndose formulado por el cabo del puesto de la Guardia civil de Verin la denuncia del coche núm. 1.º de la propiedad de Amador Britos que hace el recorrido desde el pueblo del Pereiro (Mezquita) á la villa del citado Verin, por infringir en el viaje efectuado el dia 28 del mes de Septiembre último, el art. 10 del Reglamento de carruajes de 13 de Mayo de 1857 en su vista he acordado por providencia de 30 del citado mes, imponer al dueño del mismo la multa de 20 pesetas con arreglo á lo que preceptúa el artículo 35 del expresado Reglamento.

Lo que se hace público en este periódico oficial conforme á lo que determina el párrafo 4.º de la Real orden de 27 de Noviembre de 1858.

Orense 2 de Octubre de 1894.

El Gobernador interino,
TIRSO ALONSO

glamento de carruajes de 13 de Mayo de 1857; en su vista he acordado por providencia de 30 del citado mes imponer al dueño de la misma, la multa de 15 pesetas con arreglo á lo que preceptúa el artículo 35 del expresado Reglamento.

Lo que se hace público en este periódico oficial conforme á lo que determina el párrafo 4.º de la Real orden de 27 de Noviembre de 1858.

Orense 2 de Octubre de 1894.

El Gobernador interino,
TIRSO ALONSO

El Alcalde de Ginzó de Limia me participa haberse ausentado de la casa paterna el joven Eliseo Valencia y Valencia, hijo de Gusabal, vecino de esta villa, cuyas señas son:

En su virtud, los señores Alcaldes, fuerza de la Guardia civil, agentes de vigilancia y demás dependientes de mi autoridad procederán á la busca y detención de dicho sugeto poniéndolo á disposicion de dicho Alcalde, caso de ser habido.

Señas de Eliseo Valencia

Edad 19 años.
Estatura regular.
Pelo castaño.
Color pálido.
Ojos castaños.

Viste de pana obscura, el pantalón y chaleco nuevos, gasta boina negra y botines también negros.
Orense 2 de Octubre de 1894.

El Gobernador interino,
TIRSO ALONSO

Segun participa á este Gobierno el Alcalde de Ginzó, se ausentó de la casa paterna el joven Andrés Lopez Lozano, de 16 años de edad, estatura pequeña, cara redonda y nariz chata, hijo de Manuel y Rafaela vecinos de Solveira.

En su virtud, los señores Alcaldes, fuerza de la Guardia civil, agentes de vigilancia y demás dependientes de mi autoridad, procederán á la busca y detención de dicho joven poniéndolo á disposicion del referido Alcalde, caso de ser habido.

Orense 2 de Octubre de 1894.

El Gobernador interino,
TIRSO ALONSOPRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de la provincia de Málaga y la Audiencia de la misma ciudad, de los cuales resulta:

cisco Clavirino Montosa compareció ante el Juzgado de Alora manifestando que, habiéndose acordado por el Gobernador civil de la provincia la demolicion de ciertas obras efectuadas por el padre del compareciente D. Francisco Clavirino y Quiroly, súbdito italiano, en la huerta de su propiedad de Santa María de las Vegas, término de Pízarra, confinante con el río Guadalhorce, previniéndole que comenzara los trabajos de demolicion y de abrir cauce á dicho río por dentro de la citada huerta en el término de quinto día; que se apeló de dicha resolucion para ante el Ministerio de Fomento, y, además, se interpuso ante el Juzgado demanda de interdicción de retener contra la referida providencia administrativa, que confirmó la del Alcalde de Pízarra, demanda que el Juzgado admitió citando al Alcalde de Pízarra para el juicio verbal que había de celebrarse el día 30 del mismo mes; que esto no obstante, el Alcalde de la nombrada villa, constituido en dicha propiedad al frente de unos 200 hombres, comenzó á demoler un muro y á echar violentamente el río por medio de la huerta, talando y cortando árboles que tenían muchos años de existencia;

Que el Juzgado, como medida previa, se constituyó en el lugar de los sucesos, practicando diligencia de reconocimiento judicial, resultando comprobado que una cuadrilla, como de 100 ó más trabajadores, destruían un muro y abrían

un cauce de 11 ó 12 metros de anchura, descajando y desarraigando árboles que revelaban una existencia de diez años ó más; que recibida declaracion al Alcalde, manifestó que obraba por mandado del Gobernador, y dirigido telegrama á esta Autoridad preguntándole si había autorizado al Alcalde para ejecutar las expresadas obras, contestó que por reclamacion de parte se había resuelto que las obras ejecutadas en la margen del río Guadalhorce fueran destruidas, llevando el río á su cauce natural, para lo que se dió comision al Alcalde.

Que ofrecido el sumario, el Procurador D. Joaquín Manueta, á nombre de perjudicado Clavirino Quiroly, presentó querrela en forma, fundada en los hechos ya expuestos, y añadiendo que obedecían á un complot formado para intimidar á Clavirino, llegándose á formar grupos tumultuarios en las orillas del río que hacían disparos á la vez de bombas y proyectiles, dictámen pericial y plano, de los que resultan los siguientes extremos: que en propiedad de D. Francisco Clavirino fue derribado por su base un muro de cerramiento que en longitud de 132 metros construyó aquél en el interior y al Norte de su dicha propiedad; que á mas de los daños causados con la corta de alamedas y descuaje de naranjos, se produjeron otros por efecto de la explosion de dinamita empleada en la destruccion del muro; que de la ruina arrancada en parte para la apertura del nuevo cauce, desapareció por entero el trunco, justificando dichos daños en la cantidad de 8.900 pesetas;

Que D. Diego Morales y D. Miguel Bozullo acudieron al Ayuntamiento de Pízarra interesando, previa la formacion del oportuno expediente, el derribo del susodicho muro y la demolicion de las obras de defensa construidas por Clavirino contra las aguas del río Guadalhorce en el cauce y ribera de este, restituyendo la corriente por su primitivo cauce, dejando las cosas en el ser y estado que tenían antes de la construccion, fundados en que dichas obras habían dado origen á la desviacion de las aguas y á los daños y perjuicios originados y probables que se lamentaban; y tramitado el expediente de referencia, el Alcalde resolvió, conforme á lo solicitado, que D. Francisco Clavirino procediera á la demolicion total de las

obras ejecutadas en el término de quince días; y como de tal providencia ape-
lase el querellante y fuera confirmada por el Gobernador civil de la provincia, interpuso á su vez contra este providido recurso de alzada para ante el Ministerio de Fomento, que fué denegado por el Gobierno de provincia, continuando la tala y descuaje de arbolado, derribo de muro y apertura de nuevo cauce, hasta que se recibió telegrama del Ministro de Fomento ordenando la suspensión de trabajos y la remisión del recurso de alzada interpuesto por el dicho Clavarino.

Que en tramitación la referida querrela, el Gobernador de la provincia, á instancia del Alcalde de Alora y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió de inhibición al Juzgado, fundándose en que según el caso 3.º del art. 4.º de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, son del dominio público los ríos con sus álveos ó cauces naturales, según el 34 de la misma ley; que el art. 52 de la citada ley de Aguas dice que los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas márgenes por medio de plantaciones, siempre que lo juzguen conveniente; dando de ello oportuno conocimiento á la Autoridad local. La Administración podrá sin embargo, previo expediente, mandar suspender tales obras y aun restituir las cosas á su anterior estado cuando amenazan aquellas causar perjuicios á la navegación ó flotación de los ríos, desviar las corrientes de su curso natural ó producir inundaciones, y que por consiguiente, el Alcalde de Pizarra obró dentro de sus atribuciones al acordar la demolición de las obras del río Guadalhorce, como resultado de la denuncia formulada y probada por los propietarios ribereños D. Diego Morales y D. Miguel Boitillo; que la policía de las Aguas públicas y sus cauces naturales está á cargo de la Administración; que el Alcalde de Pizarra se limitó en el expediente de referencia á tramitar una solicitud, dictando la providencia que estimó arreglada á derecho, la cual apelada ante la Superioridad, fué confirmada en todas sus partes, y mandada ejecutar, la ejecutó según se le tenía ordenado, y en tal virtud ninguna responsabilidad puede de obediencia debida á su superior inmediato; que según afirman los Ingenieros que han intervenido en el expediente, la desviación del curso natural del río Guadalhorce y los destrozos ocasionados en las huertas del término municipal de Pizarra, eran debidos única y exclusivamente á las obras de defensa hechas por D. Francisco Clavarino en el cauce del río, y que de no demoler dichas obras y reformar la margen destruida, se ocasionarían mayores males que los ocurridos. El Gobernador citaba además art. 226 de la mencionada ley de Aguas, el 116 de la ley de Enjuiciamiento civil, 27 de la ley provincial, 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887 y varias decisiones de competencia.

Que tramitado el incidente, el Juez dictó auto declarando que, según las diligencias practicadas, resultaba un caso complejo cuyos hechos en parte correspondían su conocimiento á la Administración y en su casi totalidad á los Tribunales ordinarios; pues en cuanto á los daños causados al ejecutar la providencia confirmada por el Gobernador, existía una cuestión previa de la cual dependía el fallo que en su día hubiesen de dictar los Tribunales ordinarios; más en cuanto á los daños reconocidos en el informe pericial de haberse sustraído todo el fruto de la viña propiedad de Clavarino, como

también al extremo tercero de la querrela, que afirma obedecer la formación del expediente instruido en la Alcaldía de Pizarra á complot tramado para intimidar al referido Clavarino y obligarle á que se prestara á ciertas exigencias en favor de determinadas personas de alta influencia, llegando á formarse grupos tumultuarios á las orillas del río, podían ser actos constitutivos de delitos, cuyo conocimiento y castigo corresponde á los Tribunales; que en cuanto á los hechos de la denuncia reproducidos en la querrela, referentes á comenzar el Alcalde de Pizarra las obras de demolición del muro y descuaje de árboles dentro del plazo que la propia Administración concediera al Clavarino para ejecutarlos por su cuenta, y cuando no podían realizarse por tener pendiente recurso de alzada de la providencia dictada por el Gobernador para ante el Ministro de Fomento, debían depurarse para determinar si son ó no constitutivos de delito, sin que respecto á tales hechos haya, igualmente que en los anteriores, cuestión previa ni perjudicial que resolver, pues aun decidido que la Administración obró dentro de la esfera que le es propia, resultaría siempre el hecho de haberse dado comienzo á los trabajos por el Alcalde de Pizarra de modo indebido y con evidente perjuicio del derecho del propietario para realizarlos á su cuenta. En virtud de estos razonamientos, concluida el Juez que, reconociendo la existencia de una cuestión previa administrativa, por lo que respecta á los daños y perjuicios realizados en el cauce, ribera y margen del Río Guadalhorce, se abstiene del conocimiento de ellos hasta que por la Administración se resolviera y se declaraba competente para conocer y seguir instruyendo el correspondiente sumario en cuanto á los demás hechos denunciados y que han resultado en el curso de las diligencias, por no existir, para juzgar la jurisdicción ordinaria en definitiva, cuestión previa que toque decidir á la Administración.

Que por el Ministerio fiscal se interpuso reforma de dicho auto y apelación subsidiaria, sobre cuyo primer recurso se abstuvo el Juez de proveer, conformándose con las indicaciones del querellante por creerlo improcedente, y admitió la apelación entablada, remitiendo el recurso, dictando el Tribunal auto por el que se declaraba incompetente, por ahora, el Juez de Alora para conocer el sumario de donde procedía el recurso, por corresponder la cuestión que mantuvo su incoación al conocimiento de la Administración, mientras que por ésta no se resolviera previamente la existencia de alguna responsabilidad que deba exigirse por la jurisdicción ordinaria, en cuya virtud quedó revocado el auto apelado. Se mandaba devolver la causa al Juez de instrucción para que, previa deducción de los correspondientes testimonios para perseguir los hechos del hurto de uvas y sedición, cumpliera dentro del término con lo que establece el art. 15 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887.

Que el Gobernador, sin oír á la Comisión provincial, dirigió oficio á la Audiencia de Málaga, manifestando haber determinado: primero, requerir á la Sala para que, consecuente con el reconocimiento que tenía hecho de que á la Administración incumbía entender y resolver la cuestión previa administrativa que envolvía la querrela criminal, y modificara su auto en la parte en que se ordenaba al Juzgado deducir testimonios para perseguir los hechos de hurto de uvas y de sedición y para que acordara que los testimonios deducidos se unían al rollo principal; y segundo, que como en caso de que la

Sala no accediera á este requerimiento había que considerar que virtualmente sostenía la competencia de la jurisdicción ordinaria, se tuviera por formalizada y mantenida, en lo que á los mencionados hechos se refería:

Que la Audiencia, estimando que en la anterior comunicación se comprendía una nueva competencia respecto á las causas mandadas deducir, expuso al Gobernador que si lo estimaba oportuno requiriese de nuevo al Juez, que con facultad propia se hallaba conociendo del sumario:

Que el Gobernador, en nuevo oficio manifestó que no había tenido el propósito que se le atribuía de suscitar una nueva competencia con respecto á los particulares de que la Sala mandó sacar testimonio, sino de mantener en toda su integridad la competencia suscitada en el requerimiento dirigido al Juzgado, por entender que todos los hechos eran conexos y que no se podía dividir la continuación del asunto, resultando de lo expuesto el presente conflicto:

Visto el art. 17 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, según el cual, el Gobernador, oída la Comisión provincial, y dentro de los tres días siguientes á la recepción del oficio dirigirá nueva comunicación al requerido, insistiendo ó no en estimarse competente:

Considerando:

1.º Que el Gobernador de la provincia de Málaga, al insistir en el requerimiento, dejó de oír á la Comisión provincial, no cumpliendo lo preceptuado en el artículo del Real decreto antes mencionado.

2.º Que esto constituye un vicio sustancial en el procedimiento que impide, por ahora, resolver la presente cuestión de competencia.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar mal formada esta competencia; que no ha lugar á decidirla, y lo acordado.

Dado en San Sebastian á cinco de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

(G. núm. 229)

REALES ÓRDENES

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministro de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo de Segovia al Abogado del Estado, Oficial de primera clase de Administración civil, D. Manuel Reyes de la Manja, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministro de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo de Sevilla

al Abogado del Estado, Alejandro E. García Pinto, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministro de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo de Soria al Abogado del Estado, Oficial de primera clase de Administración civil, D. Inocencio Martínez Canicas, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministro de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo de Tarragona al Abogado del Estado, Jefe de Negociado de tercera clase de Administración civil, D. Manuel Fernández Ferrero, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministro de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo de Teruel al Abogado del Estado, Oficial de primera clase de Administración civil, D. Pascual Serrano Abad, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministro de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo de Toledo al Abogado del Estado, Jefe de Negociado de segunda clase de Administración civil, D. Joaquín Vivas Salazar, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894. —Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministerio de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo de Valencia al Abogado del Estado, Jefe de Negociado de primera clase de Administración civil, D. Felipe Cardiel y Velasco, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministro de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo de Valladolid al Abogado del Estado, Jefe de Negociado de primera clase de Administración civil, D. Salvador Gomez Alonso, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministerio de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo de Vizcaya al Abogado del Estado, Oficial de segunda clase de Administración civil, D. Luis Vives y Vilá, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministro de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo de Zamora al Abogado del Estado, Oficial de segunda clase de Administración civil, D. Baldomero Gabriel y Galán, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 25 de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa de 22 de Junio último, y á propuesta del Ministro de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo de Fiscal del Tribunal provincial de lo Contencioso administrativo de Zaragoza al Abogado del Estado, Jefe de Negociado de segunda clase de Administración civil, D. Severiano Bruyel de la Cueva, con los derechos que le correspondan con arreglo á las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1894.—Sagasta.—Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros.

(G. núm. 268)

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Muy Reverendo Nuncio Apostólico,

Vengo en nombrar para la Canongía vacante en la Santa Iglesia Colegial de San Ildetonso, por defunción de Don Antonio Hidaigo Lázaro, al Presbítero Don Rogelio Arguch-Sahuquillo, que ha justificado hallarse comprendido en el art. 21 del Real decreto concordado de 23 de Noviembre de 1891.

Dado en San Sebastián á veintinueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepon.

De conformidad con lo prevenido en el art. 7.º del Real decreto orgánico de 29 de Agosto de 1893;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar en el turno primero para la plaza de Presidente de la Audiencia provincial de Granada, vacante por traslación de D. Carlos Bonel; á D. Joaquin Martón y Gavin, excedente de la misma categoría.

Dado en San Sebastián á veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepon.

Accediendo á los deseos de D. Eduardo March y Llopis, Fiscal de la Audiencia de Granada;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en trasladar á igual plaza de la de Pamplona, vacante por haber sido también trasladado D. Felix Santa Maria del Alba.

Dado en San Sebastian á veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepon.

Accediendo á lo solicitado por don Julián Menendez de Lurca y Rodríguez, Presidente de la Audiencia provincial de Gerona;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en trasladarle á la plaza de Magistrado de la territorial de Valencia, vacante por permuta con D. Antonio Pinazo.

Dado en San Sebastián á veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepon.

Accediendo á lo solicitado por Don Antonio Pinazo y Ayllón, Magistrado de la Audiencia territorial de Valencia;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en trasladarle á plaza de Presidente de la provincial de Gerona, vacante por permuta con D. Julián Menendez de Lurca.

Dado en San Sebastián á veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepon.

Accediendo á los deseos de D. Eusebio Martín y Ruiz, Fiscal electo de la Audiencia provincial de Cuenca;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrarle para igual plaza de la de Ciudad Real, vacante por defunción de D. Manuel Clavero.

Dado en San Sebastian á veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepon.

De conformidad con lo prevenido en el art. 7.º del Real decreto orgánico de 29 de Agosto de 1893;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar para la plaza de Magistrado de la Audiencia provincial de Toledo, vacante por defunción de D. Jorge Morlan á D. Vicente Garzón y Sanchez, excedente de la misma categoría.

Dado en San Sebastián á veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Maria Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepon.

(G. núm. 270.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN

Pasado á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo á la suspensión del Ayuntamiento de La Lantejuela, decretada en 26 de Julio último por el Gobernador civil de Sevilla, ha emitido con fecha 28 del actual el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: Por Real orden de 21 del corriente, se consulta á la Sección en el expediente de suspensión del Ayuntamiento de La Lantejuela, provincia de Sevilla, resultando de los antecedentes:

Que nombrado un Delegado comenzó la visita con arreglo al Real decreto de 22 de Abril de 1890, é hizo constar en el expediente los hechos siguientes:

No se realizan arcos nensuales ni se llevan otros libros de con-

tabilidad que unos borradores de gastos é ingresos; el repartimiento vecinal de consumos se recauda sin estar aprobado por la Superioridad ni haberse formado el oportuno expediente de repartimiento, pues solo existe un libro talonario, concurren idénticas circunstancias en la cobranza de otro repartimiento extraordinario para cubrir el presupuesto municipal; durante el ejercicio de 1893 á 94 no ha entregado el Ayuntamiento al ramo de Hacienda cantidad alguna por concepto de consumos, aunque según los talones cobrados, que importan 2.328 pesetas y 34 céntimos, corresponden al Tesoro 1.181 pesetas y 90 céntimos; los presupuestos no se hallan aprobados desde 1889 á 90, ni han sido puestos en ejercicio sin esta formalidad; la documentación se halla en completo abandono; pues el Secretario actual sólo lleva cuatro meses en su destino.

Dada cuenta del expediente en sesión extraordinaria del 3 de Julio, no se expuso descargo alguno.

Pasado el expediente á informe de la Comisión provincial, esta le evacuó, proponiendo la suspensión del Ayuntamiento y que se pasara el tanto de culpa á los Tribunales, con cuyo parecer conformóse el Gobernador, suspendiendo al Alcalde y Concejales por providencia de 26 de Julio.

Aunque en la fecha en que informa la Sección han transcurrido sesenta y tres días desde el siguiente á la providencia gubernativa, sin contar el de la fecha, como quiera que los Concejales han debido ser reintegrados en el ejercicio de sus cargos diez días antes del de la elección de Diputados provinciales, durando esta posesión hasta el 13 del corriente, señalado para el esdeducirse quince días de antedicho tiempo, en cuyo supuesto V. E. puede conocer del expediente por faltar aun dos días, el de la fecha y el inmediato, para completar el plazo legal de cincuenta días, pasado el cual sin resolución superior, vuelven los Concejales suspensos al ejercicio legítimo de sus cargos. Entrando en el expediente, encuentra la Sección plenamente justificada la providencia de suspensión, pues basta la lectura de los hechos extractados para convenirse de su extraordinaria gravedad.

De una parte, el Ayuntamiento ha prescindido de las disposiciones vigentes sobre contabilidad; hecho que puede encubrir abusos merecedores de una corrección penal mas severa, y de otra la negligencia y el abandono han llegado al extremo de traducirse en exacciones ilegales manifiestas, como la cobranza de repartimientos sin la formación de los oportunos expedientes, instruidos con arreglo á las formalidades prevenidas.

Asimismo, la falta de ingresos

en la Delegación de Hacienda del cupo del Tesoro por consumos, que ha sido recaudado, es otro hecho gravísimo que exige la intervención de los Tribunales para su debido esclarecimiento.

Por tanto, y por tratarse de casos de extralimitación, abuso de autoridad y negligencia graves, que exigen la suspensión y producen responsabilidad criminal, comprendidos para la legitimidad de la suspensión en los artículos 180, números 1.º y 3.º y 183, párrafo tercero de la ley Municipal, la Sección opina que procede confirmar en todas sus partes la providencia del Gobernador, pasando los antecedentes a los Tribunales de justicia para el esclarecimiento de los hechos.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos, con devolución del expediente. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1894. —El Subsecretario, encargado del despacho de asuntos urgentes, Alonso Castrillo. —Sr. Gobernador civil de la provincia de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Entre las Diputaciones provinciales, la mitad próximamente, que tiene en lamentable atraso el pago del aumento gradual de sueldo á los Maestros y Maestras de las escuelas públicas de sus respectivas provincias, aparece por quince anualidades la de Valladolid, la cual, por falta de datos oficiales sin embargo como una de las deudoras en el estado que acompañaba á la Real orden de 23 de Mayo último, elevada por este Ministerio á ese de su digno cargo, á fin de que no permitiera, con ocasión del examen de los presupuestos para el ejercicio corriente de 1894-95, que dejaran de consignarse en ellos las cantidades necesarias para satisfacer dichas obligaciones, bastante desatendidas por cierto en las provincias que el referido estado comprende. A juzgar por el resultado, no fueron infructuosas del todo las medidas adoptadas por V. E. al expresado objeto, pues que, excepción hecha de unas pocas, en las que se cuenta Valladolid, respondieron las demás á sus excitaciones, incluyendo en los mencionados presupuestos los créditos indispensables para solventar aquellas, según oportunamente lo han comunicado á la Dirección general de Instrucción pública. En su virtud, de acuerdo con lo propuesto por el Centro directivo; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-

no, ha tenido á bien acordar que se signifique á V. E., como lo hago en su Real nombre, con urgente es que por el Ministerio cuya digna representación lleva, se adopten las más eficaces medidas para que sin excusa ni pretexto abonen con puntualidad y exactitud la Diputación provincial de Valladolid y las restantes que se hallan en descubierto á los Maestros y Maestras de las mismas las sumas que se les adeudan en concepto de aumento gradual de sueldo, cumpliendo en este particular lo que prescriben terminantemente los artículos 196 y 197 de la ley de Instrucción pública.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Septiembre de 1894. —Alejandro Góizar. —Sr. Ministro de la Gobernación.

(G. núm. 273)

ANUNCIOS OFICIALES

AYUNTAMIENTOS

OIMBRA

Instruido el oportuno expediente que ha sido aprobado por la superioridad, para la reparación del puente sobre el río Tamega, que lleva el nombre de esta villa, y conforme con lo acordado por la Corporación que presido, se saca á pública subasta y licitación la indicada obra, cuya subasta tendrá efecto en el salón de sesiones de este Ayuntamiento el día 10 de Octubre próximo á las nueve de la mañana, por ser urgente, presidiendo el acto al Alcalde, con asistencia del Síndico y bajo la fe del Secretario. El tipo de la subasta es de 12.156 pesetas y 40 céntimos, conforme al presupuesto de contrata, el cual, así como los planos, pliegos de condiciones económicas y facultativas á que se han de sujetar la obra y contrato, con los demás antecedentes necesarios á la debida inteligencia, se harán de manifiesto en la Secretaría todas las horas hábiles de oficina. La licitación se verificará durante el plazo de una hora que empezará á la de 9 de la mañana citada, por proposiciones verbales y pujas á la llana, previa entrega al Presidente, en sobreabierto, de la cédula personal y resguardo del depósito provisional constituido en la Caja de la Depositaria de este municipio por importe del 5 por 100 del valor total presupuesto, ó sea líquido 607 pesetas, 82 céntimos, sin perjuicio de aumentarlo para la fianza definitiva, que habrá de prestarse también en metálico y en la misma Caja, hasta el 20 por ciento que según el mismo, asciende á 2.431 pesetas 28 céntimos por aquel á quien se haga la adjudicación, devolviéndose, después de hecha esta, los depósitos, correspondientes á las proposiciones desechadas. Sin aquel requisito, no serán admitidas dichas proposiciones, habiendo de hacerse estas en alta voz y ajustadas al modelo que sigue.

Hecha la adjudicación definitiva, se formalizará el contrato, duradero por 2 años, que es el tiempo en que ha de ejecutarse la obra á medio de acta ante la Corporación de que se expedirá certificación al interesado, siendo de cuenta de este el pago de todos los gastos que hubiere ocasionado la subasta; y advirtiéndose que, subvencionada esta obra por la Excmo. Diputación provincial, la cual ha consignado desde luego, en su

presupuesto del ejercicio corriente 6 000 pesetas, los pagos se verificarán por cuenta de esta consignación y á medida que el Ayuntamiento perciba la referida suma y resto al completo de la adjudicación; todo ello y demás con arreglo á lo establecido en el R. D. de 4 de Enero de 1883 y disposiciones complementarias.

Ombra 24 Septiembre 1894. —El Alcalde, Atanasio Lorenzo. —De su mandado, Daviz Estevez. —Secretario.

Modelo que se cita

Me comprometo á ejecutar las obras necesarias para la reparación del puente Ombra sobre el río Tamega, bajo las condiciones que han de regir el contrato, por la cantidad de.... (en letra) pesetas.... céntimos.

Fecha y firma.

VEREA

Confecionado por la Junta pericial el repartimiento formado por el aumento de la riqueza urbana, que resultó descubierto en este distrito con motivo del Registro Fiscal, se halla expuesto al público por término de ocho días en la Secretaría de este Ayuntamiento, para que durante los mismos puedan examinarlo los contribuyentes y formular las reclamaciones que consideren justas, previniéndole que transcurrido que sea dicho plazo no serán atendidas las que se presenten.

Verea Setiembre 30 de 1894. —El Alcalde, Ventura Araujo.

TRIBUNALES

PRIMERA INSTANCIA

Don José de Lezameta y Gutierrez, Juez de instrucción del distrito de San Vicente de esta ciudad y su partido.

Hago saber: que en este Juzgado y Escribanía del que refrenda el presente, se instruye sumario por supuesto delito de falsificación de moneda, á instancia del Ministerio Fiscal, por no haber sido posible á el Juzgado cumplir con lo que disponen los artículos 268 y 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre identidad del presunto denunciante; y como á pesar del cúmulo de diligencias que han sido practicadas al expresado fin, no se ha podido

recindir el sumario, y domicilio del que, ó de los que suscriben las referidas denuncias, bajo los nombres y apellidos de Pedro Gonzalez, M. Gonzalez, José Canete, Pedro Calderón, Eustaquio Fernandez Laserna y Jacinto Vega, no obstante que el periódico que se publica en la ciudad de Santander, bajo el título *La Voz Montañesa*, en su número 7252, correspondiente al día 20 de Agosto último, en que se inserta una de aquellas que ha sido reproducida en otros periódicos tomándola de aquel, consigna de cuenta propia ser los tres últimos «personas respetables de esta ciudad» en donde ni se les conoce, ni figuran en el padron vecinal, he acordado hacer público aquella ocultación y en su virtud, á fin de depurar por cuantos medios racionales de investigación están á mi alcance, el llamar por el presente á expresados sujetos ó á aquel que ha suscrito las denuncias dichas con los nombres antes expresados, para que dentro del término de diez días contados desde el siguiente al en que el presente vea la luz en la *Gaceta de Madrid*, comparezca ante el Juzgado, situado en la Plaza de la Contratación número 8, á fin de que pueda cumplirse con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los artículos citados.

Al propio tiempo cito y llamo á cuantas personas puedan suministrar algún dato ó antecedente por insigni-

ficante que sea, sobre el vecindario ó domicilio de los supuestos denunciados, así como sobre el hecho origen del presente sumario; y por último, requiero á todos los individuos de policía judicial para que por cuantos medios estén á su alcance, indaguen y averigüen todo lo que les sea posible sobre aquellos particulares y lo pongan inmediatamente en conocimiento de este Juzgado.

Dado en Sevilla á 25 de Septiembre de 1894. —José de Lezameta. —Por mandado de su señoría, el Actuario, José M. de Chelana.

ANUNCIOS

MANUAL

de Secretarios de Juzgados municipales

POR M. A. C.

De la Redacción de *El Secretariado* MATERIAS QUE CONTIENE

I. Reglamento para la provision de las plazas de Secretarios y suplentes de los Juzgados municipales de 10 de Abril de 1871. —II. Deberes de los Secretarios de Juzgados municipales. —III. Leyes del matrimonio y registro civil y reglamentos dictados para su ejecución. —IV. Contratos y demás obligaciones. —V. Procedimientos civiles en lo que hace referencia á los actos de conciliación, á los de jurisdicción voluntaria que son, ó pueden ser, de las atribuciones de los Juzgados municipales, á los juicios verbales, á la prevención de las testamentarias ó sucesiones intestadas, al desempeño de comisiones auxiliaorias en lo civil y á la adopción de providencias interinas, que por su naturaleza no pueden diferirse sin daño de los interesados. —VI. Formularios en materia civil. —VII. Libro III del Código penal. —VIII. Procedimientos criminales en lo que hace referencia á los juicios de faltas, á la prevención de las primeras diligencias en las causas criminales y el desempeño de las comisiones auxiliaorias en lo criminal. —IX. Formularios en materia criminal. —X. Uso del papel sellado en las actuaciones judiciales y documentos públicos y Aranceles judiciales con relación á los Jueces y Fiscales municipales, Secretarios y alguaciles.

Precio: OCHO pesetas.

De venta en las librerías y en la Administración del *Secretariado*, Santa Teresa, 8, bajo, Madrid.

CASA EN VENTA

La viuda de José Trabazos vende la casa en construcción número 93 de la calle del Progreso de esta ciudad, cuyo solar y terreno adyacente mide once metros de fachada por 65 de fondo; linda al Norte con solar de don Hipólito Bravo; al Mediodía con casa de D. David Perez; al Poniente con viña de doña Concepción Gonzalez, y al Naciente con la calle del Progreso por donde tiene la entrada, que está libre de cargas y rentas.

Los títulos de propiedad, precio y condiciones están de manifiesto en la Notaría de D. Pablo Martínez donde pueden examinarlos cuantas personas se interesen en la adquisición. 15-30

ABONARÉS DE CUBA

Se pagan á buenos precios

También se compra papel del Empréstito de 175 millones de pesetas.

Calle de San Pedro, núm. 12, 2.º

ORENSE 13-30

ABONARÉS DE CUBA

Los compra D. Demetrio Rodriguez SAN FERNANDO, 21. —ORENSE

Imprenta LA POPULAR